

Evaluación de la Justicia Electoral y en los Derechos de los Mexicanos Residentes en el Extranjero

Dr. Daniel Tacher Contreras¹

Introducción

La migración mexicana, principalmente hacia Estados Unidos, ha transformado las relaciones políticas y demográficas entre ambos países, configurando una nación binacional con un vínculo fuerte. En este contexto, el derecho de los mexicanos en el extranjero a participar políticamente en México es crucial para construir una democracia inclusiva. La intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido fundamental para proteger estos derechos, especialmente en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, donde se enfrentaron retrocesos y desafíos en la implementación de acciones afirmativas.

El trabajo evalúa el impacto de las sentencias del TEPJF sobre la representación política de los mexicanos en el extranjero, analizando avances y limitaciones en la legislación y en la implementación de acciones afirmativas. Se realizó un análisis cualitativo de sentencias clave, utilizando el Portal de Justicia Electoral Digital para identificar tendencias y evaluar cómo han evolucionado las políticas del TEPJF en respuesta a los cambios sociales.

El trabajo concluye que, si bien el TEPJF ha sido esencial para la expansión de derechos, persisten barreras estructurales que impiden una participación plena de los mexicanos en el extranjero. Se recomienda fortalecer el enfoque de representación auténtica y mejorar las políticas del Tribunal para consolidar una democracia inclusiva. Asimismo, se sugiere revisar los requisitos para candidaturas migrantes y establecer mecanismos que aseguren una representación auténtica de la comunidad.

¹ Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Contacto: daniel.tacher@uacm.edu.mx
<https://orcid.org/0000-0003-0566-6963>

Reformas Electorales y el Voto Extraterritorial

La reforma política de 1996 en México fue crucial al establecer cambios significativos en la organización de elecciones y abrir el debate sobre el voto desde el extranjero. En particular, esta reforma permitió que los mexicanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, demandaran el derecho a votar. Aunque el Instituto Federal Electoral (IFE) creó en 1998 una comisión para estudiar la viabilidad de este voto, su implementación estuvo limitada por desafíos logísticos y económicos.

En 2005, se aprobó una reforma que incorporó el derecho al voto extraterritorial en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), permitiendo la votación postal para elecciones presidenciales. Sin embargo, esta legislación impuso restricciones, como la limitación de campañas en el extranjero y la necesidad de que los votantes cubrieran sus propios gastos de envío de solicitudes de inscripción. La primera experiencia de votación en 2006 mostró una baja participación, con solo el 0.81% del electorado potencial inscrito.

Para la elección de 2012, se flexibilizaron algunos requisitos, aumentando moderadamente la participación. A pesar de las dificultades, el número de mexicanos participando desde el extranjero creció, aunque la tasa final de participación se redujo en comparación con el número total de inscritos.

Tabla 1. Comparativo de los procesos electorales con voto desde el extranjero		
	2006	2012
Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero	40,876	59,115
Países de residencia (registro)	80	91
Sobres voto recibidos	33,131	40,737
Porcentaje de participación	79.8%	68.87%
Fuente: Elaboración propia con información del INE		

Avance en las Entidades Federativas

El reconocimiento de los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero también se ha abordado en las entidades federativas, impulsado por la

historia migratoria de cada región. Desde finales del siglo XIX, la migración de México hacia Estados Unidos ha sido continua y ha respondido a factores como la pobreza, violencia rural, y desigualdad, consolidando redes transnacionales entre los migrantes y sus comunidades de origen.

Este contexto ha permitido que estados como Zacatecas implementen en 2003 una representación migrante en su congreso, aunque inicialmente sin un mecanismo de votación. Este "efecto cascada" llevó a otras entidades como Michoacán, Morelos, Coahuila, Distrito Federal y Chiapas a implementar sistemas de votación en elecciones locales. Por ejemplo, Michoacán incorporó en 2007 el voto postal para la elección de gobernador, ajustando el modelo federal para reducir costos y facilitar el registro de electores.

En elecciones de 2012, Chiapas y el Distrito Federal adoptaron el voto electrónico por internet, permitiendo a los ciudadanos en el extranjero mayor acceso al proceso electoral y marcando un avance en la inclusión de los mexicanos migrantes en las decisiones políticas locales.

Papel de la Justicia Electoral entre 2006 y 2012

Entre 2006 y 2012, la justicia electoral en México desempeñó un rol fundamental en la protección de los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero. Durante este periodo, la mayoría de los juicios se centraron en temas de registro de electores, debido a las restricciones para que los ciudadanos en el extranjero accedieran al Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE). De los casos atendidos, el 98.72% fue resuelto por la Sala Regional del Distrito Federal, y un pequeño número llegó a la Sala Superior y otras salas regionales.

Los juicios se enfocaron en:

1. **Plazos de Registro:** Algunos casos, como los de personas que enviaron su solicitud fuera de tiempo, se resolvieron considerando la situación excepcional de los residentes en el extranjero.
2. **Excepcionalidad de la Residencia:** Los casos de María Dolores Cruz García y Cecilia Torres Serrano reflejaron la necesidad de flexibilizar el requisito de regreso a México para trámites, al determinar que esto violaba sus derechos político-electorales.

3. **Medios de Registro y Uso de Correo Ordinario:** Casos como el de Enrique Cid de Jesús y Ovalle Cerna resaltaron problemas con la documentación y el tipo de correo, llevándolos a favor de los ciudadanos en situaciones de impedimentos logísticos.
4. **Mecanismos de Votación Electrónica:** La justicia electoral, en el caso "Voto Chilango", validó el uso del voto electrónico por internet en 2012, sentando un precedente para la adopción de tecnologías en el sistema electoral.

Además, el derecho a ser votado presentó desafíos. Ejemplos como el caso de Andrés Bermúdez, quien fue revocado de su cargo debido a su residencia en el extranjero, revelan limitaciones legales para los migrantes que desean ser candidatos. Esto impulsó reformas en Zacatecas para permitir la "residencia binacional". La justicia electoral también enfrentó conflictos entre cuotas de representación migrante y paridad de género, como en el caso Jaime Ambriz Moreno, donde se priorizó la paridad de género.

La justicia electoral durante este periodo abordó complejidades de inclusión política para los mexicanos en el extranjero, garantizando una mayor participación democrática, aunque con limitaciones en los derechos de representación activa.

Impacto de la Reforma Electoral de 2014

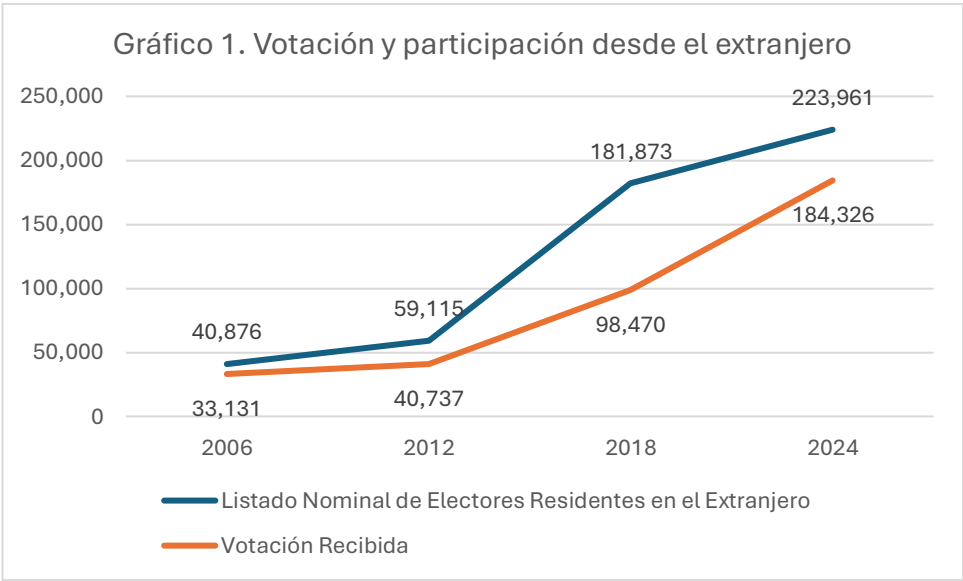
La reforma electoral de 2014 transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional Electoral (INE), creando un sistema nacional de elecciones con la autoridad centralizada del INE. Esta reestructuración amplió los derechos político-electorales de los mexicanos en el extranjero, facilitando su participación en elecciones locales y federales.

Uno de los avances clave fue la creación de un padrón permanente de electores en el extranjero, permitiendo la emisión y activación de credenciales en consulados y embajadas, mejorando la precisión en el registro de votantes. Además, la reforma introdujo tres modalidades de votación para los mexicanos en el extranjero: por correo, en sedes consulares y electrónicamente por internet, siendo este último modelo implementado por primera vez a nivel federal en la revocación de mandato de 2022.

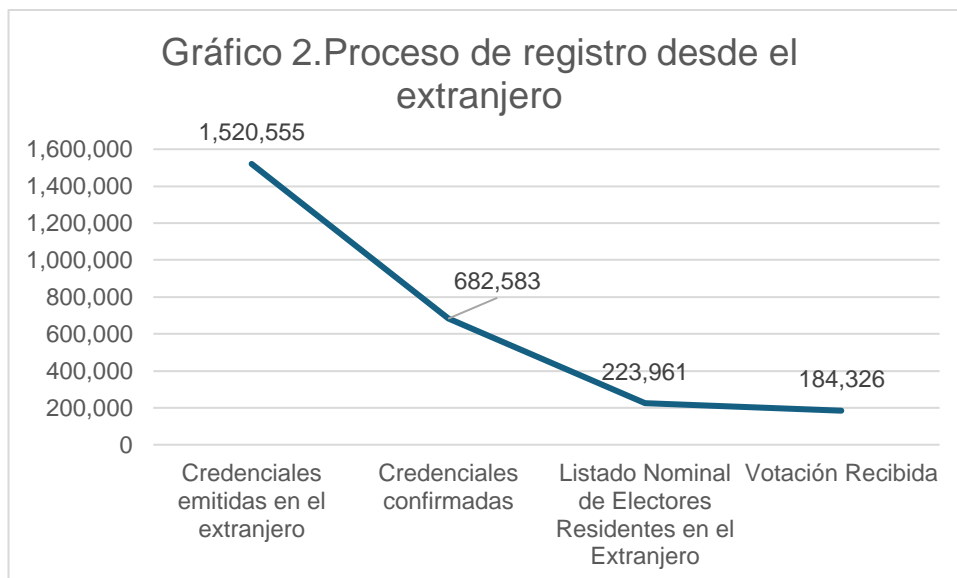
El Tribunal Electoral también tuvo un papel crucial en asegurar que el INE implementara el voto presencial en embajadas y consulados, establecido como obligatorio en 2023. Esta reforma marcó un avance importante en el acceso y garantía de los derechos de los votantes mexicanos en el extranjero, mejorando su participación democrática.

Proceso Electoral 2023-2024

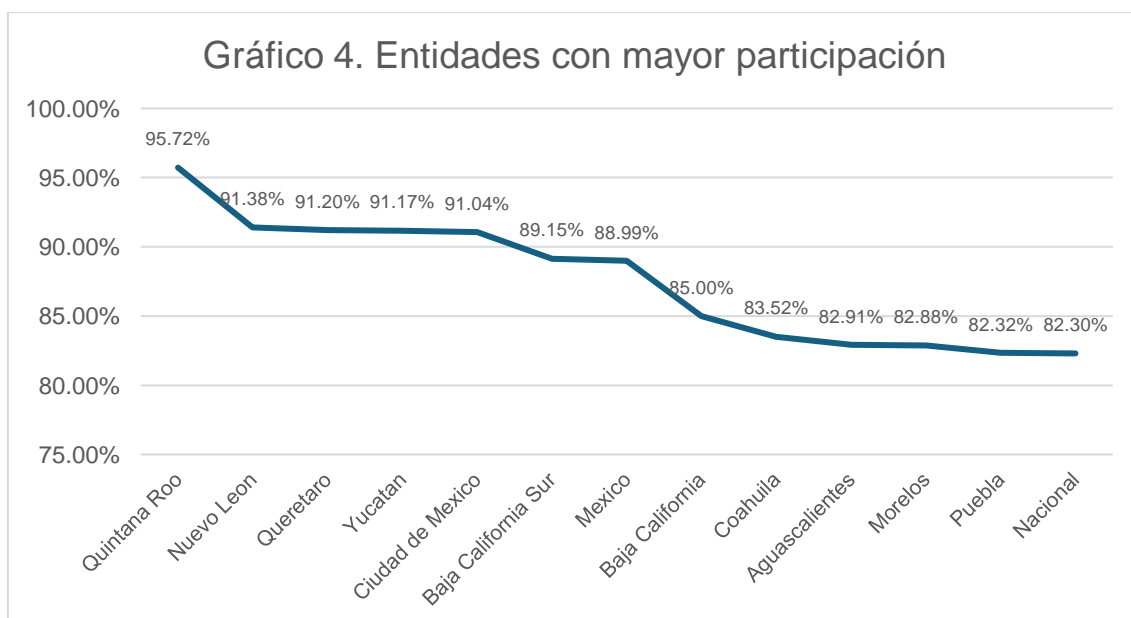
El Proceso Electoral Federal 2023-2024 en México marcó un avance significativo para los derechos de los mexicanos en el extranjero, permitiendo la votación para el Ejecutivo Federal y, por segunda ocasión, para senadurías. En esta elección se ofrecieron, por primera vez, las tres modalidades de votación: postal, electrónica y presencial en consulados. Además, se permitió el voto para nueve ejecutivos locales y cuatro congresos estatales, incluyendo medidas afirmativas para postulaciones de migrantes en el Congreso Federal.



La lista nominal de electores en el extranjero alcanzó los 223,961 ciudadanos, reflejando un crecimiento del 478% desde 2006, y la votación total recibió un aumento del 456% respecto a 2006, con 184,326 votos en 2024. Sin embargo, el número de credenciales emitidas en consulados aún contrasta con los votantes efectivos debido a la falta de información, aspecto que afecta la participación completa.



En esta elección, la participación llegó a un máximo histórico del 82.3%, impulsada por la flexibilidad de las tres modalidades de votación. Algunos estados como Quintana Roo y Nuevo León superaron el 90% de participación, aunque sigue siendo necesario mejorar el acceso y la comunicación sobre el proceso. Los logros del proceso de 2024 refuerzan la integración del voto extraterritorial en el sistema democrático de México y señalan áreas a mejorar para futuras elecciones, asegurando una mayor accesibilidad y efectividad para todos los ciudadanos mexicanos en el extranjero.



Intervención de la Justicia Electoral y Acciones Afirmativas para la Ciudadanía Mexicana en el Extranjero

La evolución de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero ha alcanzado una tercera etapa en la que la justicia electoral ha jugado un papel esencial para garantizar su inclusión en la representación política. Aunque las reformas legislativas han sido clave para reconocer estos derechos, el Tribunal Electoral ha intervenido para consolidarlos y asegurar su aplicación efectiva, especialmente mediante acciones afirmativas que permiten a los migrantes participar en cuerpos legislativos.

Uno de los casos más destacados es el de la diputación migrante en la Ciudad de México. Esta figura, incluida en la Constitución de la Ciudad, fue restablecida tras la resolución del Tribunal Electoral en el asunto SUP-REC-88/2021, sentando un precedente importante sobre la representación de la diáspora mexicana y su inclusión en la legislatura local. Esta resolución fortaleció los derechos colectivos de los mexicanos en el extranjero y subrayó su relevancia en el ámbito legislativo.

Otra intervención relevante fue en el proceso electoral 2020-2021, donde la justicia electoral, mediante la resolución SUP-RAP-21/2021, exigió a los partidos políticos incluir a migrantes en sus listas de representación proporcional para el Congreso Federal. Estas acciones afirmativas obligaron a los partidos a reservar candidaturas para los ciudadanos mexicanos en el extranjero, asegurando su participación política a nivel federal.

La intervención de la justicia electoral ha sido fundamental para superar las barreras legales y administrativas, garantizando que los mexicanos en el extranjero puedan disfrutar plenamente de sus derechos políticos. Aun así, persisten retos para lograr una representación más efectiva y equitativa, y se espera que la justicia y las autoridades electorales sigan avanzando en el desarrollo de mecanismos inclusivos para esta comunidad.

Diputación Migrante en la Ciudad de México

La creación de la diputación migrante en la Constitución de la Ciudad de México en 2017 representó un hito en la inclusión política de los mexicanos residentes en el extranjero, al permitirles no solo votar, sino también postularse en elecciones locales. Esta disposición, incluida en el artículo 7 de la Constitución, refleja un

compromiso con la representación de grupos prioritarios, como migrantes y minorías históricamente marginadas.

Sin embargo, en 2020, el Congreso de la Ciudad de México intentó derogar esta figura argumentando problemas de costo y representatividad. Esta decisión generó una fuerte oposición entre la comunidad migrante y diversas organizaciones, quienes impugnaron la medida. La Sala Regional de la Ciudad de México determinó que la derogación violaba los principios de progresividad y no regresividad de derechos humanos, y ordenó la reactivación de la diputación migrante para el proceso electoral 2020-2021. La Sala Superior ratificó esta decisión en agosto de 2020, estableciendo un precedente para la protección de los derechos políticos de la diáspora mexicana.

La resolución también subrayó la importancia de las acciones afirmativas para corregir desigualdades estructurales y garantizar una representación equitativa. Este caso consolidó el papel de la justicia electoral en la promoción de la igualdad e inclusión en México, asegurando que los derechos de los migrantes en el sistema democrático mexicano se mantengan y se fortalezcan.

Acciones Afirmativas en el Proceso Electoral 2020-2021

El proceso electoral 2020-2021 en México fue pionero en la implementación de acciones afirmativas para grupos subrepresentados, incluyendo a la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. En un esfuerzo por fortalecer la representación indígena, el INE reservó 21 distritos para candidaturas indígenas, decisión confirmada por el Tribunal Electoral en el caso SUP-RAP-121/2020, quien además ordenó al INE diseñar acciones afirmativas para otros grupos, como los migrantes. El caso SUP-RAP-21/2021 fue fundamental, ya que estableció la inclusión de al menos una fórmula de candidaturas migrantes en las listas de representación proporcional, con principios de paridad de género. Sin embargo, el acuerdo INE/CG160/2021 generó controversia al permitir la postulación de personas que no residían en el extranjero bajo esta medida, lo que resultó en impugnaciones. El Tribunal Electoral resolvió en el caso SUP-JDC-346/2021 que solo los residentes actuales en el extranjero podían beneficiarse de esta acción afirmativa, corrigiendo la ambigüedad inicial.

El proceso evidenció la necesidad de criterios claros y documentos específicos, como la credencial para votar desde el extranjero, para validar la residencia migrante. A pesar de los desafíos, las acciones afirmativas lograron la inclusión de diez migrantes en la Cámara de Diputados, consolidando un precedente clave para la representación política de los mexicanos en el extranjero y estableciendo un marco más sólido para futuras elecciones.

Efectos de la Intervención de la Justicia Electoral en el Proceso Electoral 2020-2021

La intervención de la justicia electoral en 2020-2021 fue clave para la ampliación de los derechos político-electorales de los mexicanos residentes en el extranjero. Gracias a decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se fortalecieron los modelos de representación migrante en entidades como Zacatecas, Ciudad de México, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Dos enfoques legislativos emergieron: la reserva de escaños para migrantes, como en Zacatecas, y candidaturas preferentes en las listas de representación proporcional, como en Nayarit, ambos garantizando que la diáspora mexicana tenga una representación política real.

La justicia electoral desempeñó un papel crucial al evitar la eliminación de la diputación migrante en la Ciudad de México y al equilibrar intereses entre la representación migrante y otros grupos vulnerables. Además, al revisar criterios de acreditación de residencia en el extranjero, previno posibles fraudes, asegurando la autenticidad de las candidaturas migrantes.

Este proceso ha establecido un modelo de intervención judicial replicable, promoviendo una democracia inclusiva y adaptada a la diversidad mexicana, tanto dentro como fuera del país, y garantizando que las acciones afirmativas respondan genuinamente a los derechos de la diáspora.

Conclusiones

La intervención de la justicia electoral en el proceso electoral 2020-2021 resultó esencial para la protección y expansión de los derechos político-electorales de los mexicanos residentes en el extranjero. A través de resoluciones clave, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrigió omisiones en las acciones afirmativas del INE, logrando una representación efectiva de la diáspora mexicana y otros grupos históricamente marginados en las listas de representación

proporcional. Estas decisiones establecieron precedentes legales importantes que fortalecen el principio de progresividad en los derechos humanos.

La labor de la justicia electoral destaca por su papel de garante de igualdad e inclusión en la democracia mexicana. Al resolver desafíos como la acreditación de residencia y la aplicación correcta de acciones afirmativas, el Tribunal fortaleció la legitimidad del proceso electoral, asegurando una representación genuina de los migrantes. Este enfoque resalta el compromiso de México con un sistema político inclusivo, mejorando la autenticidad y confiabilidad de sus elecciones.

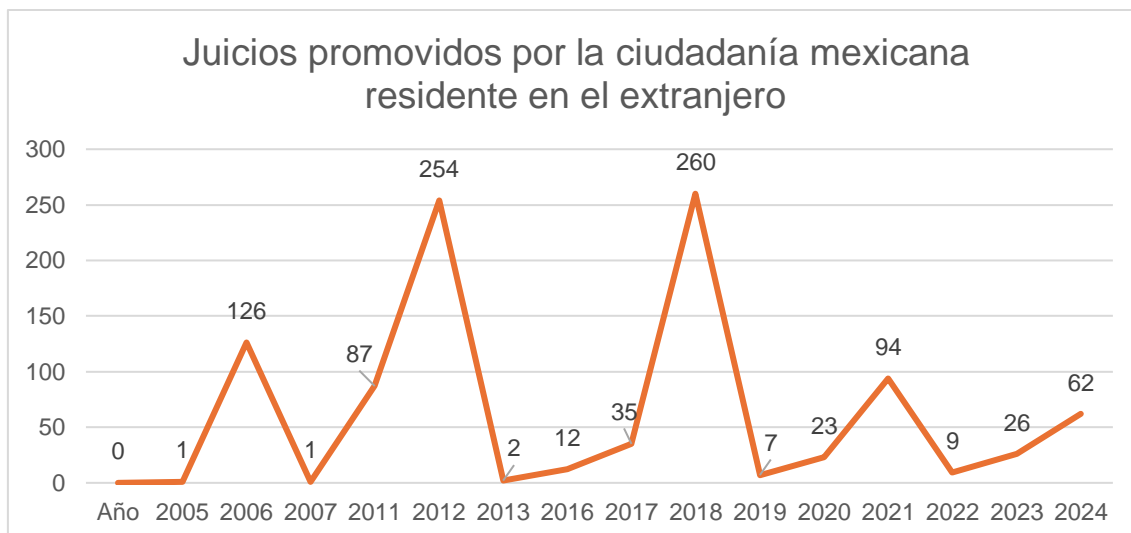
Con un marco legal en constante evolución, la experiencia del proceso electoral 2020-2021 subraya la importancia de mantener una intervención judicial activa. Las bases sentadas por el Tribunal Electoral proporcionan un modelo de intervención replicable que garantiza que la democracia mexicana refleje la diversidad y complejidad de su población, asegurando inclusión tanto en el diseño como en la práctica.

Evaluación de la Política Institucional del Tribunal Electoral para la Protección de los Derechos Políticos de los Mexicanos Residentes en el Extranjero

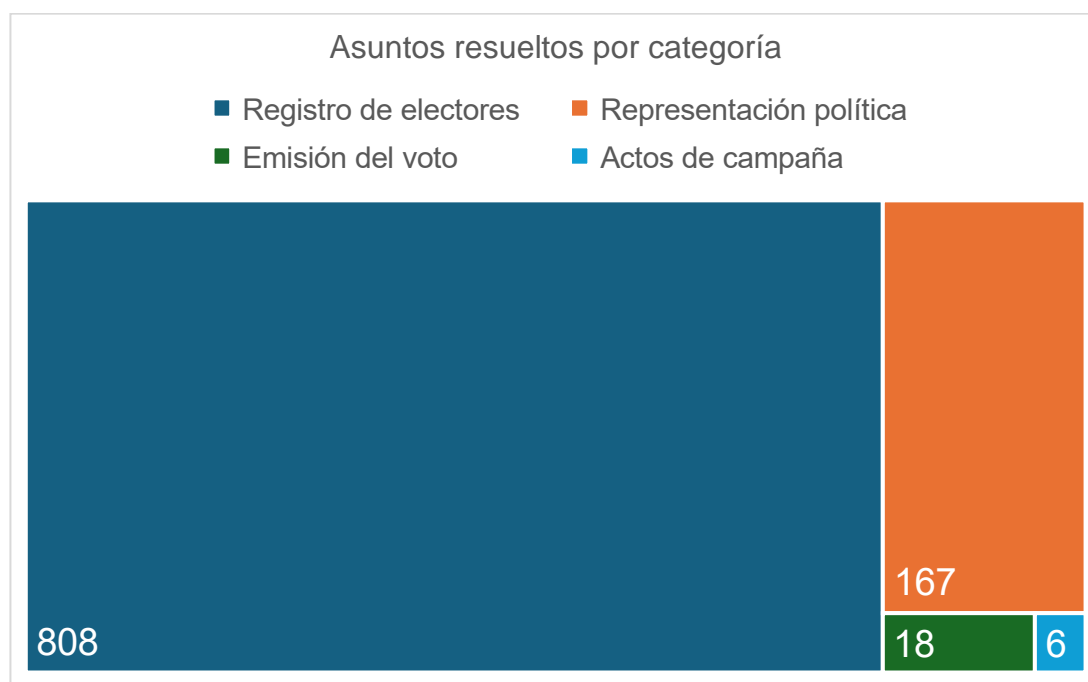
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido esencial en la defensa y ampliación de los derechos político-electorales de los mexicanos en el extranjero, adaptándose a las demandas de una comunidad migrante creciente. Durante el proceso electoral 2023-2024, el TEPJF aplicó políticas orientadas a garantizar derechos de representación para la diáspora mexicana, consolidando la progresividad de estos derechos.

Evolución de los Casos Judiciales

A partir de 2005, el TEPJF ha recibido un total de 999 expedientes relacionados con derechos políticos de mexicanos en el extranjero. Inicialmente, los casos se centraron en el derecho al voto, sobre todo en relación con el registro de electores y la implementación del voto postal.



Con el tiempo, y tras la reforma de 2014 que permitió el uso de credenciales en el extranjero y la activación del Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), los litigios sobre registro electoral disminuyeron, sugiriendo una estabilización del proceso.



Posteriormente, los expedientes empezaron a abordar temas de representación política, destacando casos como la diputación migrante en Ciudad de México y medidas de inclusión en Zacatecas y Nayarit. En particular, los casos sobre

representación política alcanzaron un punto crucial en 2021, mostrando un aumento en el control y cumplimiento de candidaturas migrantes.

El análisis de los datos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero entre 2005 y 2024 muestra una evolución clara en los temas abordados y en la respuesta institucional del Tribunal. Inicialmente, los casos se enfocaron en el registro de electores, especialmente en los primeros años de implementación del voto postal. Sin embargo, con el tiempo y la introducción de nuevas modalidades, como la emisión de credenciales en el extranjero, el enfoque de los litigios cambió y el número de casos relacionados con el registro disminuyó considerablemente.

A partir de 2021, la representación política de los mexicanos en el extranjero emergió como el tema prioritario, impulsada por la implementación de acciones afirmativas como la diputación migrante en la Ciudad de México y escaños reservados en otros estados. Este cambio generó un aumento significativo en el número de juicios, reflejando un esfuerzo mayor de los migrantes y sus organizaciones para garantizar la autenticidad de las candidaturas y su alineación con los intereses de la comunidad migrante.

En contraste, los temas relacionados con la emisión del voto y los actos de campaña han generado menos litigios, lo que sugiere que estos aspectos, aunque importantes, no han sido tan prioritarios para la comunidad migrante como los temas de registro de electores y representación política. Este análisis evidencia las áreas clave de intervención del TEPJF y cómo su labor ha respondido a las necesidades cambiantes de los mexicanos en el extranjero, estableciendo un marco de derechos que promueve una representación auténtica y equitativa en el sistema electoral mexicano.

Política Judicial del TEPJF: Fortalecimiento de la Vinculación con la Ciudadanía en el Extranjero

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha desarrollado políticas orientadas a fortalecer la vinculación con la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, reconociendo la importancia de esta comunidad en el proceso electoral mexicano. Sin embargo, una revisión de los informes de labores,

incluyendo el de 2023, revela que las iniciativas de justicia abierta, que inicialmente fueron una prioridad, han perdido visibilidad en la agenda institucional. Esta discontinuidad refleja una debilidad en el compromiso del TEPJF con la transparencia y la participación, lo que puede impactar la confianza de la diáspora en el sistema electoral.

La justicia abierta es una estrategia que busca democratizar el acceso a la justicia mediante la transparencia, la participación y la colaboración. Para la comunidad mexicana en el extranjero, la justicia abierta representa un medio crucial para mantenerse informada y activa en la vida democrática del país. El TEPJF, comprometido con este enfoque, ha implementado varias iniciativas para reforzar esta relación.

Estas acciones reflejan un compromiso con los principios de justicia abierta, reforzando la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en el sistema electoral. No obstante, para fortalecer esta relación, es necesario mantener y ampliar estas políticas de forma continua y visible en la agenda institucional. Un sistema de justicia electoral abierto y accesible para todos, especialmente para los mexicanos en el extranjero, es fundamental para una democracia verdaderamente inclusiva y representativa.

Defensoría Pública Electoral

La Defensoría Pública Electoral, operativa desde enero de 2023, fue creada por el TEPJF para proporcionar asesoría y representación legal gratuita a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas, personas con discapacidad y mexicanos en el extranjero. Su misión es garantizar que todos, independientemente de su situación económica o social, tengan acceso equitativo a la justicia electoral, en línea con los principios de justicia abierta y derechos humanos.

La Defensoría ha implementado una serie de estrategias orientadas a la vinculación y el apoyo de la comunidad mexicana en el extranjero, asegurando que esta población tenga acceso efectivo a sus derechos políticos y a una participación significativa en el sistema democrático mexicano. Entre estas estrategias destacan:

1. **Asesoría y Representación Legal:** La Defensoría ha proporcionado apoyo a ciudadanos y organizaciones que representan intereses de grupos vulnerables y minoritarios. Este servicio ha sido crucial para garantizar que las acciones afirmativas en representación de los migrantes sean aplicadas de manera auténtica, defendiendo candidaturas y derechos políticos a nivel federal y estatal.
2. **Litigio Estratégico:** A través de su participación en litigios que buscan una implementación genuina de las acciones afirmativas, la Defensoría ha impulsado que las candidaturas migrantes no sean solo formalidades, sino representaciones auténticas y conforme a la legalidad. Su rol ha sido decisivo para que estas candidaturas cumplan criterios sustantivos de inclusión y se alineen con las necesidades de los migrantes.
3. **Difusión y Colaboración Internacional:** La Defensoría ha realizado campañas informativas en colaboración con consulados y embajadas, desarrollando mecanismos de atención remota para conectar de manera efectiva con los mexicanos en el extranjero. Estas iniciativas son vitales para informar y sensibilizar a la comunidad migrante sobre sus derechos políticos.
4. **Alianzas con Sociedad Civil:** Colaborando con organizaciones civiles, la Defensoría ha fortalecido el apoyo para grupos beneficiados por acciones afirmativas. Estas alianzas permiten un mayor impacto en la promoción y defensa de los derechos políticos de los migrantes y en su representación en espacios de toma de decisiones.

En su conjunto, estas acciones reflejan el compromiso de la Defensoría Pública Electoral en la defensa de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, así como de otros grupos vulnerables, fortaleciendo su inclusión en el sistema democrático mexicano. La Defensoría ha demostrado que la protección de los derechos político-electorales va más allá de la justicia formal, contribuyendo a una democracia más accesible, representativa y equitativa.

Red de Observación en Justicia Electoral (ROJE)

La Red de Observación en Justicia Electoral (ROJE) fue una iniciativa del TEPJF diseñada para vincular de manera permanente al Tribunal con la sociedad civil,

instituciones académicas y ciudadanos interesados en la justicia electoral. Fundamentada en los principios de justicia abierta —transparencia, participación y colaboración—, la ROJE buscaba fortalecer la legitimidad y confianza en el sistema de justicia electoral al permitir que estos sectores participaran activamente en la observación de los procesos electorales.

La ROJE permitió a la sociedad civil y a otras organizaciones observar los procesos electorales, aumentando la transparencia y rendición de cuentas de las decisiones del TEPJF. Este enfoque no solo facilitó una supervisión externa de los procedimientos electorales, sino que también amplificó las voces de grupos subrepresentados, como los migrantes, ayudando a integrar sus perspectivas y demandas en la toma de decisiones jurisdiccionales.

Para la comunidad mexicana en el extranjero, la ROJE sirvió como un canal esencial para involucrarse en el proceso electoral mexicano. A través de colaboraciones con redes de migrantes y diversas organizaciones, la ROJE permitió que los ciudadanos en el extranjero, a pesar de la distancia, pudieran monitorear y participar activamente en los procesos electorales. En 2023, se fortaleció esta vinculación al establecer relaciones con más de 200 representantes de organizaciones y liderazgos migrantes, quienes se integraron como observadores en los procesos de justicia electoral.

Capacitaciones y Talleres para Migrantes

En colaboración con consulados y organizaciones comunitarias, la ROJE también organizó talleres y capacitaciones dirigidos a migrantes. Estas actividades abordaron temas como la importancia de la participación electoral y la observación de procesos desde el extranjero, facilitando un entendimiento profundo sobre los derechos político-electorales de la comunidad migrante. Estas capacitaciones no solo mantuvieron informados a los migrantes, sino que también les ofrecieron herramientas para contribuir activamente al fortalecimiento de la democracia mexicana.

En conjunto, la ROJE consolidó un modelo de justicia abierta que involucró efectivamente a la ciudadanía y promovió una democracia inclusiva. Al facilitar la participación activa de la comunidad migrante en la observación electoral, esta red se convirtió en una herramienta clave para asegurar que el sistema electoral

mexicano represente y responda a las necesidades de todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia.

Juicio en Línea

El juicio en línea es una modalidad innovadora del TEPJF que permite a la ciudadanía presentar demandas y recursos electorales de manera digital, eliminando la necesidad de acudir presencialmente al tribunal. Como parte de las políticas de justicia abierta, esta herramienta facilita el acceso a la justicia electoral, especialmente para los mexicanos en el extranjero que enfrentan barreras geográficas.

A pesar de sus ventajas, el uso del juicio en línea sigue siendo limitado. Durante el proceso electoral federal 2023-2024, solo 5 de los 142 asuntos relacionados con la ciudadanía mexicana en el extranjero fueron tramitados mediante esta modalidad. Este bajo uso refleja desafíos como:

- **Necesidad de mayor difusión:** Es importante que los ciudadanos conozcan esta herramienta y sus beneficios.
- **Capacitación en el uso de la plataforma:** La formación adecuada es esencial para que los usuarios puedan emplear el sistema de manera efectiva.
- **Accesibilidad tecnológica:** Asegurar que todos los ciudadanos tengan los medios tecnológicos para acceder al juicio en línea es crucial para su adopción masiva.

El juicio en línea representa un avance en la justicia abierta y accesible. Sin embargo, para maximizar su impacto y adopción, el TEPJF deberá enfocarse en superar los desafíos actuales, impulsando una mayor capacitación, difusión y accesibilidad para asegurar que todos los ciudadanos, en especial los residentes en el extranjero, puedan aprovechar plenamente esta modalidad.

Conclusiones

La evaluación de las políticas del TEPJF dirigidas a proteger los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero evidencia una evolución en la atención a temas que abarcan desde el registro de electores hasta la representación política. Este cambio responde a una demanda creciente de la comunidad migrante y subraya la necesidad de políticas específicas y sostenidas para este sector.

La vinculación efectiva no debe verse como un esfuerzo adicional, sino como una parte esencial de las políticas del TEPJF, contribuyendo a una participación más equitativa e inclusiva. La reducción de estas actividades de vinculación podría erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, limitando su capacidad de participar plenamente en los procesos democráticos y afectando la legitimidad del sistema electoral.

Avances y Retrocesos de la Justicia Electoral en el Ejercicio del Derecho al Voto Pasivo de la Ciudadanía Mexicana Residente en el Extranjero

El reconocimiento y protección de los derechos político-electorales de los mexicanos en el extranjero, en particular el derecho al voto pasivo o el derecho a ser votado, han tenido una evolución compleja. Este derecho es fundamental para asegurar una representación efectiva y equitativa de los mexicanos que residen fuera del país, pero su implementación ha estado marcada por avances significativos y por retrocesos que evidencian las tensiones de la ampliación de la representación política.

Las acciones afirmativas han sido esenciales para promover la inclusión de grupos subrepresentados en el sistema político de México. Desde las cuotas de género hasta medidas específicas para comunidades indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, estas acciones reflejan un compromiso con la justicia social. En el caso de los mexicanos en el extranjero, la creación de la diputación migrante en la Ciudad de México fue un hito, permitiendo que los residentes fuera del país puedan no solo votar, sino también postularse para ocupar cargos públicos. Esta medida simboliza un avance importante en la integración política de la diáspora mexicana.

En el proceso electoral de 2023-2024, el TEPJF tomó decisiones clave que reforzaron la inclusión de los migrantes, en particular mediante la implementación de cuotas y de medidas afirmativas que aseguran espacios para los migrantes en las listas de representación proporcional. Además, la implementación de mecanismos como el juicio en línea representa un paso hacia la democratización del acceso a la justicia, lo cual es esencial para los ciudadanos en el extranjero.

A pesar de estos avances, persisten retrocesos que dificultan el pleno ejercicio del voto pasivo para los mexicanos en el extranjero. Barreras legales y administrativas, así como ciertos criterios restrictivos en decisiones judiciales, limitan su acceso a este derecho. En algunas entidades, el requisito de residencia efectiva ha sido interpretado de forma restrictiva, lo que impide que muchos migrantes puedan postularse para cargos de elección popular. Estas limitaciones refuerzan obstáculos que impiden la representación de los mexicanos que, aunque residan fuera, mantienen un vínculo económico, cultural y social con su lugar de origen. Además, la falta de continuidad en las políticas de justicia abierta del TEPJF y de un esfuerzo sostenido para promover el uso de herramientas como el juicio en línea impiden que los migrantes accedan de manera plena y equitativa a la justicia electoral. A pesar de su potencial, el juicio en línea sigue sin ser utilizado ampliamente debido a la falta de una estrategia efectiva de difusión y capacitación, lo que representa un obstáculo para el acceso a la justicia de esta comunidad. En este contexto, la movilización jurídica y el litigio estratégico han sido herramientas fundamentales para los mexicanos en el extranjero, quienes, mediante estos mecanismos, han logrado consolidar avances en la representación política y en la defensa de sus derechos. Las demandas de estos ciudadanos han llevado a que el TEPJF tome decisiones que buscan balancear el derecho de representación de los migrantes con otros criterios como la paridad de género. No obstante, este proceso de litigio es complejo y requiere recursos y acceso a la información, elementos que siguen siendo desafíos para muchos ciudadanos.

Voto Pasivo, Representación Política y Acciones Afirmativas

El voto pasivo, o el derecho a ser votado y ocupar cargos de elección popular, es crucial para garantizar una representación política inclusiva y equitativa. Para los mexicanos residentes en el extranjero, este derecho es especialmente relevante, ya que permite que sus voces y necesidades se escuchen en los órganos de gobierno de México. Sin embargo, para que este derecho se ejerza de manera efectiva, no es suficiente su reconocimiento legal; son necesarias acciones afirmativas para corregir desigualdades históricas y estructurales y para garantizar la aplicación concreta de este derecho.

Las acciones afirmativas surgen de la necesidad de asegurar que los grupos históricamente marginados tengan igualdad de oportunidades en los procesos políticos. Basadas en teorías de justicia social y democracia deliberativa, estas medidas buscan corregir desventajas estructurales y asegurar que voces diversas influyan en las decisiones gubernamentales. Desde la perspectiva de la justicia social, se argumenta que las desigualdades históricas han excluido a ciertos grupos de la participación política efectiva, y una sociedad justa debe corregir estas desventajas para permitir su participación en igualdad de condiciones (Rawls).

A lo largo del tiempo, se han implementado varias formas de acción afirmativa en México, como:

1. Cuotas de Representación: Inicialmente diseñadas para aumentar la participación política de las mujeres, estas cuotas han evolucionado para incluir a otros grupos, como indígenas, afroamericanos y migrantes.
2. Listas Electorales Inclusivas: Exigen a los partidos políticos incluir a un número determinado de representantes de grupos vulnerables en sus listas de candidatos.
3. Distritos Electorales Especiales: Creación de distritos específicos para que los grupos vulnerables elijan directamente a sus representantes, aplicando criterios similares al derecho de representación de grupos identitarios en otros contextos internacionales, como los grupos étnicos en la India.

Estos mecanismos buscan asegurar que la representación no sea solo formal, sino sustancial y auténtica. En este contexto, el mecanismo de Reservas Legislativas para ciertos grupos permite la creación de espacios de representación específicos, que no compiten con el sistema de partidos existente, sino que crean nuevos incentivos electorales para representar a estos sectores marginados.

Acciones Afirmativas en el Proceso Electoral 2023-2024

Durante el proceso electoral 2023-2024, el Estado mexicano implementó acciones afirmativas y medidas de inclusión para la ciudadanía mexicana en el extranjero, reforzando su participación política mediante modalidades de votación ampliadas. Los votantes en el extranjero no solo pudieron ejercer su derecho al voto por correo y por internet, sino también, por primera vez, de forma presencial en 23 sedes consulares en países como Estados Unidos, Canadá, España y Francia. Estas

opciones subrayan el compromiso de México por hacer accesible el ejercicio de los derechos políticos sin importar el lugar de residencia.

En este ciclo, los mexicanos en el extranjero tuvieron la oportunidad de votar para una variedad de cargos, entre ellos la Presidencia de la República, Senadurías, Gubernaturas en estados como Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, así como Diputaciones locales en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Oaxaca. La posibilidad de elegir representantes en estos niveles significa un avance en la integración política de los migrantes mexicanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció criterios específicos para el registro de candidaturas, incluyendo medidas afirmativas para diversos grupos, entre ellos los mexicanos en el extranjero. Estas acciones buscan fortalecer la inclusión y asegurar que se mantengan los logros alcanzados en elecciones previas. No obstante, algunas variaciones en comparación con ciclos anteriores suscitaron un debate sobre la progresividad y la permanencia de los derechos políticos adquiridos, subrayando la necesidad de equilibrio entre innovación electoral y respeto a los principios de progresividad.

El proceso electoral 2023-2024 revela un panorama de avances significativos en la inclusión de los mexicanos en el extranjero mediante acciones afirmativas, aunque aún persisten obstáculos legales y administrativos que limitan el ejercicio pleno del voto pasivo. La justicia electoral ha jugado un papel esencial en la expansión de estos derechos, con decisiones recientes del TEPJF que no solo han definido el alcance actual de las acciones afirmativas, sino también establecido precedentes que influirán en el futuro de la representación política de este sector.

El análisis de las sentencias del TEPJF en este proceso será crucial para entender cómo la justicia electoral ha contribuido tanto a los avances como a los retrocesos en la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero.

Análisis de Sentencias: Impacto Judicial en el Ejercicio de los Derechos Políticos de la Ciudadanía Mexicana Residente en el Extranjero (2023-2024)

El análisis de las sentencias emitidas durante el proceso electoral federal 2023-2024 proporciona una visión detallada del papel de la justicia electoral en el avance

y las limitaciones de los derechos político-electorales de los mexicanos residentes en el extranjero. A continuación, se presentan los temas clave abordados por la Sala Superior del TEPJF en su intervención sobre el derecho al voto pasivo de esta comunidad, con un enfoque en los casos de mayor relevancia.

Análisis de la Sentencia SUP-JDC-0324-2023: Omisión Legislativa sobre el Derecho de Acceso a la Justicia

La sentencia emitida en el caso *SUP-JDC-0324-2023*, presentado por Ricardo Landa Patiño, un ciudadano mexicano residente en el extranjero, planteó la cuestión de si el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no implementar mecanismos de justicia digital en los tribunales electorales locales. La falta de una regulación específica sobre la justicia digital, argumentó el demandante, restringe de manera significativa el acceso de los mexicanos en el extranjero a la justicia, pues les impide presentar y seguir procesos judiciales de manera remota, limitando así su derecho a una defensa adecuada de sus derechos político-electorales.

Decisión del Tribunal

La Sala Superior del TEPJF concluyó que no existe una omisión legislativa imputable al Congreso de la Unión. Su argumento se basó en que, si bien los ciudadanos en el extranjero enfrentan desventajas al no contar con herramientas digitales, no hay un mandato constitucional explícito que obligue al Congreso a legislar sobre mecanismos de justicia digital en el ámbito electoral local. Según la Sala Superior, para que se configure una omisión legislativa, debe existir un mandato expreso que el Legislativo no ha cumplido, o bien una obligación tácita de regular un derecho de manera específica que no se ha satisfecho.

Este razonamiento se fundamenta en la Tesis 1a. XX/2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual distingue entre facultades legislativas de carácter potestativo (discrecionales) y obligatorio. En este caso, el Congreso no estaría obligado por la Constitución a crear una ley específica sobre la justicia digital en tribunales locales, por lo cual no se configuraría una omisión legislativa en sentido estricto.

Opiniones Divergentes y Votos Concurrentes

La sentencia fue aprobada con una mayoría de cuatro votos, aunque no de manera unánime. La magistrada Soto Fregoso votó en contra, mientras que los magistrados Otálora Malassis y Rodríguez Mondragón emitieron votos concurrentes. Estos últimos coincidieron con la resolución, pero enfatizaron que, aunque no existiera una obligación explícita, los tribunales electorales locales deberían diseñar mecanismos que faciliten el acceso a la justicia para los mexicanos en el extranjero, dado que la falta de estas herramientas digitales afecta de manera desproporcionada a esta comunidad.

La ausencia de una infraestructura de justicia digital en el ámbito electoral crea desventajas significativas para los mexicanos en el extranjero. Los trámites presenciales se convierten en un obstáculo serio debido a la distancia y el costo, limitando la capacidad de estos ciudadanos para defender sus derechos político-electorales de manera efectiva. Esta situación no solo restringe su acceso a la justicia, sino que también profundiza las disparidades entre aquellos que pueden acceder fácilmente al sistema judicial y aquellos que enfrentan barreras considerables.

La falta de accesibilidad digital perpetúa la exclusión de los mexicanos en el extranjero, una situación incompatible con los principios de equidad y participación democrática. Desde una perspectiva de derechos humanos, aunque no exista un mandato explícito, la ausencia de mecanismos digitales afecta el derecho fundamental de acceso a la justicia, que está protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales en los que México es parte.

La resolución de este caso refleja las limitaciones actuales en el marco legislativo mexicano para atender las necesidades de la comunidad en el extranjero en términos de justicia digital. Aunque el TEPJF no encontró omisión legislativa, el debate destaca la importancia de reconocer y abordar estas barreras. La implementación de sistemas digitales en la justicia electoral no solo contribuiría a una mayor eficiencia y reducción de costos, sino que también promovería la equidad y la participación inclusiva, fortaleciendo la legitimidad democrática del sistema electoral.

Análisis de la Sentencia SUP-JE-1053-2023: Omisión Legislativa sobre el Ejercicio del Voto para Cargos de Diputaciones y Ayuntamientos

En el contexto de la reforma electoral, conocida como "Plan B," publicada el 2 de marzo de 2023, Ricardo Landa Patiño, un ciudadano mexicano residente en Estados Unidos, promovió un juicio en contra del Congreso de la Unión, alegando que no se incluyeron disposiciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para garantizar el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar por cargos como diputaciones federales, locales y miembros de ayuntamientos. El objetivo de la demanda era denunciar esta omisión y defender la inclusión de estos derechos para una representación más plena y equitativa de los mexicanos en el extranjero.

Decisión del Tribunal

El 13 de septiembre de 2023, la Sala Superior del TEPJF analizó el proyecto de resolución de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis, que proponía reconocer la omisión legislativa del Congreso en esta área. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por mayoría, y el engrose fue elaborado por el Magistrado José Luis Vargas Valdez, quien acumuló casos similares en el expediente principal SUP-JE-1053/2023.

En el análisis de fondo, la Sala concluyó que no existió una omisión legislativa imputable al Congreso de la Unión. La decisión se basó en el principio de libertad configurativa legislativa, que permite al Congreso establecer los términos y condiciones bajo los cuales se ejerce el derecho al voto. Según la Sala, el artículo 329 de la LGIPE ya permite a los ciudadanos en el extranjero votar en elecciones de presidente, senadurías y gubernaturas (cuando la ley local lo permite), y no existe un mandato expreso en la Constitución que obligue al legislador a ampliar ese derecho para otros cargos.

Votos Particulares

La sentencia fue aprobada por mayoría, con los votos a favor de los Magistrados Vargas Valdez, Infante Gonzales y Fuentes Barrera. Sin embargo, las Magistradas Janine M. Otálora Malassis y Mónica Aralí Soto Fregoso, junto con el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, emitieron votos en contra. Otálora y Rodríguez Mondragón sostuvieron que sí existía una omisión legislativa porque el artículo 35,

fracción I, de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a votar en elecciones populares. Argumentaron que esta omisión legislativa crea una desigualdad y limita injustamente el derecho al voto de los mexicanos en el extranjero.

Además, propusieron que el TEPJF diera vista a los 32 congresos locales para que, en ejercicio de su autonomía, adoptaran medidas que garantizaran a los mexicanos en el extranjero el ejercicio pleno de sus derechos en sus respectivas jurisdicciones. Este enfoque buscaba una mayor equidad y coherencia legislativa, promoviendo una representación política más inclusiva.

Implicaciones de la Sentencia

La decisión de no reconocer una omisión legislativa en este caso representa un retroceso significativo en la lucha por el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los mexicanos en el extranjero. Al limitar los derechos de votación a ciertos cargos y no a otros, se mantiene una barrera que afecta la participación de los ciudadanos que viven fuera de México. La sentencia también establece un precedente que podría dificultar futuras ampliaciones de estos derechos, al no imponer al Congreso la obligación de legislar en favor de esta comunidad.

La resolución representa un claro retroceso en la protección de los derechos de esta comunidad, y subraya la necesidad de una reforma integral que aborde de manera equitativa los derechos político-electorales de los mexicanos en el extranjero.

Análisis de la Sentencia SUP-JDC-0639-2023: Implementación del Modelo de Votación Presencial en Sedes Consulares

La reforma electoral de 2014 introdujo la opción de votar presencialmente en sedes diplomáticas, además de las modalidades de voto por correo y electrónico. A pesar de los avances en la implementación de mecanismos de votación digital, la votación presencial en sedes consulares no se ejecutó sino hasta el proceso electoral de 2023, cuando se habilitó en 23 consulados.

Durante el proceso electoral 2023-2024, el INE aprobó un modelo de votación en el cual cada sede consular recibiría un máximo de 1,000 boletas para aquellos ciudadanos que decidieran votar el día de la elección sin haberse registrado previamente. Esta decisión fue impugnada por *Fuerza Migrante A.C.* y otros

ciudadanos, argumentando que la limitación de 1,000 votantes por sede y la habilitación de solo 23 consulados restringía el derecho al voto de aquellos que vivían lejos de las sedes seleccionadas.

Resolución de la Sala Superior

La Sala Superior desechó las demandas presentadas en el caso *SUP-JDC-0639-2023*, aludiendo a los siguientes puntos:

1. Aceptación Tácita de los Lineamientos Previos: Se argumentó que el modelo de votación aprobado por el INE derivaba de lineamientos previamente emitidos para la conformación de la lista nominal de electores en el extranjero. Al no impugnarse oportunamente estas disposiciones, se consideró que la parte actora consintió tácitamente los términos del modelo.
2. Falta de Pruebas de Residencia: En un caso relacionado (*SUP-JDC-664/2023*), el tribunal desestimó la demanda al no haberse acreditado la residencia en el extranjero del actor, lo que demostraba una falta de interés legítimo en la impugnación.

Ante las preocupaciones expresadas por las organizaciones migrantes, el INE decidió ampliar el número de boletas disponibles en cada sede consular de 1,000 a 1,500 mediante el *Acuerdo INE/CG519/2023*. Esta decisión refleja el interés de la institución en maximizar la participación ciudadana, permitiendo que más ciudadanos sin registro previo ejerzan su derecho al voto.

Análisis de la Sentencia SUP-JDC-0338-2023: Acciones Afirmativas para el Proceso Electoral Federal 2023-2024

Con el inicio del proceso electoral 2023-2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó el Acuerdo **INE/CG527/2023**, que contenía acciones afirmativas para diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la comunidad mexicana residente en el extranjero. Sin embargo, este acuerdo fue considerado complejo en su aplicación, lo que podría dificultar su ejecución efectiva para cinco grupos que habían sido beneficiarios de acciones afirmativas en 2021, generando el riesgo de un retroceso en la representación de estos grupos.

Diversas organizaciones y ciudadanos, encabezados por *Fuerza Migrante A.C.*, impugnaron el acuerdo del INE, argumentando que las medidas afirmativas

establecidas para el proceso electoral federal 2023-2024 no garantizaban la inclusión y representación efectiva de ciertos grupos, como los mexicanos en el extranjero, en especial para candidaturas al Senado y diputaciones. Las demandas plantearon preocupaciones específicas:

1. Inclusión de candidaturas para el Senado, además de las ya previstas para diputaciones.
2. Condiciones restrictivas para candidatos migrantes, como el requisito de demostrar residencia de al menos seis meses fuera de México y un vínculo con la comunidad mexicana en el extranjero.

Dado el número de impugnaciones presentadas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acumuló un total de 104 juicios relacionados para una resolución conjunta.

Resolución de la Sala Superior

La Sala Superior, en su análisis, estableció criterios específicos para mantener y ajustar las acciones afirmativas del proceso electoral 2023-2024, evitando que estas medidas sufrieran un retroceso en relación con elecciones anteriores:

1. **Diputaciones de Mayoría Relativa:** Se reafirmó la garantía de tres postulaciones para personas con discapacidad, de la diversidad de género y afromexicanas, asegurando así la representación de estos grupos en condiciones de equidad.
2. **Actualización de Distritos Indígenas:** Se instruyó la inclusión de aquellos distritos con al menos un 60% de población originaria, ajustando las acciones afirmativas para una representación adecuada de las comunidades indígenas.
3. **Acciones Afirmativas para el Senado:** La Sala consideró que la implementación de acciones afirmativas para el Senado, al ser la primera vez que se aplicaban, no constituyen una regresión. Sin embargo, se especificó que cada postulación debía detallar el principio de representación, a excepción del grupo de migrantes, cuya representación sería bajo el principio de representación proporcional (RP).
4. **Posiciones Preferentes en Listas de RP:** La Sala Superior instruyó que se eliminara el sistema de franjas en la postulación de RP para diputaciones y

se volviera al criterio de posiciones en los primeros 10 lugares de la lista nacional. Para el grupo de migrantes, la Sala corrigió una regresión en el acuerdo del INE que reducía de cinco a una las fórmulas previstas para 2024 sin una justificación adecuada.

Impacto de la Sentencia

La sentencia en el caso **SUP-JDC-0338-2023** marca un avance significativo en la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, evitando una posible disminución en las oportunidades de representación de este grupo vulnerable. Al garantizar la continuidad y fortalecimiento de las acciones afirmativas establecidas en elecciones previas, la justicia electoral confirmó su compromiso con la equidad y la inclusión en el sistema político-electoral.

El fallo de la Sala Superior preserva los derechos de los mexicanos en el extranjero, asegurando que sus voces sigan representadas en el proceso electoral. La intervención judicial no solo evitó un retroceso, sino que también consolidó la representación equitativa de los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, fortaleciendo la legitimidad y justicia del sistema electoral mexicano. Con esta decisión, la Sala Superior reafirma la importancia de las acciones afirmativas para la construcción de una democracia inclusiva y equitativa, donde todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia o condición, pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Análisis de la Sentencia SUP-JDC-0617-2023: Flexibilización de Criterios para las Candidaturas Migrantes

La sentencia en el caso **SUP-JDC-0617-2023** marcó un cambio importante en la evaluación de la idoneidad de las candidaturas migrantes en el proceso electoral federal 2023-2024, al flexibilizar los requisitos de residencia mínima para los mexicanos residentes en el extranjero. Esta modificación generó controversia por los riesgos que implica para la representación auténtica de la comunidad migrante. *Fuerza Migrante A.C.*, junto con otros colectivos y ciudadanos residentes en el extranjero, promovieron la impugnación en contra de las acciones afirmativas establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el registro de candidaturas migrantes. Los demandantes argumentaban que la residencia

mínima de seis meses exigida por el INE era insuficiente para consolidar un vínculo genuino con la comunidad migrante, lo que comprometía la efectividad de las acciones afirmativas.

Los actores sugirieron que la residencia requerida para ser considerado como migrante fuera de al menos un año y, en el caso de diputaciones y senadurías, de tres a seis años, en concordancia con la duración de los cargos de elección. Estos periodos de residencia, argumentaban, asegurarían una representación genuina de las necesidades y perspectivas de los mexicanos en el extranjero.

Análisis de la Sentencia

En contraste con el precedente SUP-JDC-0346-2021, en el cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había adoptado criterios estrictos para evitar la simulación en las candidaturas migrantes, la resolución en el caso SUP-JDC-0617-2023 introdujo mayor flexibilidad al criterio de residencia. En lugar de exigir una residencia prolongada, la Sala estableció que seis meses serían suficientes para consolidar una residencia efectiva. La Sala argumentó que la residencia debía evaluarse de manera integral, en conjunto con otros requisitos, como la vinculación con una entidad federativa y la pertenencia activa a organizaciones migrantes o la participación en actividades de promoción de derechos.

Implicaciones de la Flexibilización

1. **Riesgo de Dilución de la Representación Migrante:** Al reducir el tiempo de residencia requerido a seis meses, se debilita el vínculo que debería existir entre los candidatos y la comunidad migrante. Esto abre la posibilidad de que candidatos sin una relación auténtica o duradera con la comunidad puedan postularse, poniendo en riesgo la representación fiel de los intereses migrantes.
2. **Desigualdad en las Acciones Afirmativas:** Este cambio en los criterios de residencia significa un retroceso en comparación con el rigor del precedente de 2021, donde el Tribunal había subrayado la importancia de un vínculo auténtico. En ese entonces, el Tribunal estableció que la residencia debía ser clara y continua para evitar simulaciones. Este nuevo criterio puede hacer que las acciones afirmativas no cumplan su propósito original de

corregir las disparidades de representación que históricamente han afectado a los migrantes.

3. **Discrecionalidad de los Partidos Políticos:** La sentencia permitió que los partidos políticos tengan mayor libertad para decidir la posición de los candidatos migrantes en las listas de representación proporcional (RP). Esta medida deja sin garantía que las candidaturas migrantes ocupen posiciones preferentes, reduciendo así la posibilidad de que estos candidatos lleguen a ocupar escaños y de que las acciones afirmativas generen un impacto significativo.

La decisión en el caso **SUP-JDC-0617-2023** representa un enfoque menos riguroso en el cumplimiento de las acciones afirmativas, comprometiendo la representatividad genuina de los mexicanos en el extranjero. Aunque la flexibilización de criterios se planteó como una forma de ampliar las oportunidades de participación, en realidad puede reducir la efectividad de las medidas de inclusión, al dejar en riesgo la autenticidad de la representación política de la comunidad migrante.

Al permitir que un periodo de residencia relativamente corto sea suficiente, se debilita el principio de justicia electoral que busca asegurar que los migrantes sean representados por personas con un vínculo genuino y duradero. Esto no solo limita el impacto de las acciones afirmativas, sino que también puede afectar la confianza de los migrantes en la equidad del sistema electoral mexicano, comprometiendo la integridad y legitimidad del proceso democrático.

Retroceso en los estándares de registro de candidaturas migrantes: Adopción de un estándar probatorio flexible. Asunto SUP-JDC-394/2024 y acumulados.

La sentencia en el caso **SUP-JDC-394/2024 y acumulados** introdujo un "estándar probatorio flexible" para las candidaturas migrantes, marcando un retroceso en los avances logrados en la representación política de la ciudadanía mexicana en el extranjero. Este cambio de criterio, adoptado por la **Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)**, relajó los requisitos de acreditación de residencia y vínculo comunitario necesarios para acceder a las acciones afirmativas destinadas a los migrantes, disminuyendo la rigurosidad que

caracterizó a resoluciones anteriores. A continuación, se analiza el contexto, los argumentos y las implicaciones de este cambio en los criterios de representación. La impugnación fue promovida por ciudadanos y organizaciones como *Fuerza Migrante A.C.*, que cuestionaron cinco candidaturas migrantes presentadas por el PAN y Morena. Estas candidaturas, alegaban, no cumplían con los requisitos de residencia efectiva y vínculo auténtico con la comunidad migrante, ya que algunos candidatos solo presentaron documentos de última hora, como matrículas consulares o constancias de membresía, sin pruebas robustas de una residencia genuina en el extranjero. Esta situación llevó a los actores a solicitar la revisión de la idoneidad de dichas candidaturas para garantizar una representación auténtica de la comunidad migrante.

La Decisión del Tribunal y la Adopción de un Estándar Flexible

El **Tribunal Electoral**, en su análisis, declaró inoperantes los agravios presentados, sosteniendo que los candidatos cumplían con los requisitos básicos para ser postulados bajo la acción afirmativa migrante. La decisión se justificó en un enfoque de "interpretación flexible," que dio prioridad a reducir las barreras probatorias que podrían afectar la participación política de los migrantes. Esta interpretación permitió que el criterio de residencia se redujera a seis meses, argumentando que los migrantes enfrentan dificultades especiales para reunir documentación convencional debido a su situación de residencia en el extranjero. Este enfoque flexible contrasta notablemente con precedentes como el **SUP-JDC-0346-2021**, donde el Tribunal había aplicado un criterio de evaluación más estricto, exigiendo una "autoadscripción calificada" para garantizar que las acciones afirmativas migrantes fueran ocupadas por verdaderos representantes de esta comunidad. En ese caso, se requirió que los candidatos presentaran pruebas sólidas de su vínculo con la comunidad, como la participación activa en organizaciones migrantes o servicios comunitarios específicos.

Impacto de la Flexibilización en la Representación Migrante

1. Debilitamiento de la Representatividad Auténtica: La adopción de un estándar probatorio flexible para las candidaturas migrantes compromete la calidad de la representación, ya que permite que personas con vínculos

superficiales puedan postularse, lo cual podría alejar a representantes auténticos de la comunidad migrante de los espacios de poder.

2. **Riesgo de Simulación de Candidaturas:** Este cambio de criterio permite que candidaturas sin un vínculo real con la comunidad migrante accedan a estos espacios, lo que podría derivar en una simulación de representación, disminuyendo la efectividad de las acciones afirmativas que buscan asegurar que los migrantes tengan una voz legítima en el proceso político.
3. **Inconsistencias con Otras Acciones Afirmativas:** En contraste con las medidas rigurosas aplicadas en otros casos de acciones afirmativas, como en la representación indígena (SUP-RAP-726/2017 y acumulados), el enfoque permisivo para las candidaturas migrantes debilita la coherencia de las políticas de inclusión. La autoadscripción calificada en los casos indígenas exige un vínculo profundo con la comunidad, a través de pruebas objetivas, como servicios comunitarios o participación activa en organizaciones relevantes, con el objetivo de evitar simulaciones o usurpaciones.

La resolución del caso SUP-JDC-394/2024 y acumulados establece un precedente problemático para la representación migrante en México. Al reducir el rigor en los requisitos probatorios, el Tribunal no solo limita la capacidad de las acciones afirmativas para corregir desigualdades, sino que también introduce incoherencias en su aplicación. Este cambio en los estándares abre la posibilidad de que candidatos sin un vínculo significativo con la comunidad migrante ocupen espacios políticos que deberían estar reservados para verdaderos representantes de este grupo.

En última instancia, esta decisión representa un retroceso en la lucha por asegurar la representación auténtica de los migrantes en el sistema político mexicano. La confianza de la comunidad migrante en el sistema electoral se ve comprometida, así como la efectividad de las acciones afirmativas para corregir desigualdades estructurales en la representación política.

Conclusiones

El análisis del rol de la justicia electoral en la protección del derecho al voto pasivo de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero muestra un escenario de

importantes avances, pero también de persistentes desafíos. La intervención judicial ha sido clave en la implementación y defensa de acciones afirmativas para crear una representación política más equitativa e inclusiva. Sin embargo, las resoluciones del proceso electoral 2023-2024 exponen tanto progresos como áreas que requieren atención para fortalecer la confianza y participación de la diáspora mexicana en el sistema electoral.

Uno de los puntos críticos es la falta de reconocimiento de omisiones legislativas que afectan los derechos de los mexicanos en el extranjero. Al no señalar vacíos en la legislación, la justicia electoral refuerza barreras estructurales que limitan la plena participación de este grupo. Esto no solo dificulta la inclusión de la ciudadanía residente en el extranjero, sino que también establece precedentes que pueden entorpecer futuros esfuerzos por mejorar el marco legal en áreas fundamentales, como el acceso a la justicia digital o la extensión de los derechos de voto para cargos adicionales.

Las acciones afirmativas, defendidas y fortalecidas por la justicia electoral, han sido esenciales para corregir desigualdades estructurales y asegurar que los mexicanos en el extranjero puedan participar activamente en la toma de decisiones. A través de estas medidas, se ha logrado expandir el derecho a ser votado y a tener representación en los órganos legislativos. No obstante, el proceso 2023-2024 trajo cambios en los criterios de evaluación para las candidaturas migrantes, como la adopción de un "estándar probatorio flexible" que facilita el acceso de candidatos sin un vínculo genuino con la comunidad migrante. Esta flexibilización de los requisitos afecta negativamente la calidad de la representación, permitiendo que individuos sin una auténtica conexión ocupen espacios de acción afirmativa, diluyendo así su efectividad.

Evaluación de la Justicia Electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido fundamental en la protección y expansión de derechos políticos para los mexicanos en el extranjero mediante acciones afirmativas y la resolución de omisiones legislativas. Sin embargo, la adopción de estándares probatorios flexibles en algunos casos recientes ha debilitado el rigor en la representación

migrante, exponiendo el sistema a riesgos de simulación y de representación no auténtica.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha logrado avances importantes en la promoción de la participación política de los mexicanos en el extranjero, principalmente mediante la implementación de acciones afirmativas que buscan una representación genuina. Sin embargo, ciertos criterios probatorios han sido poco rigurosos, lo cual puede afectar la efectividad de estas acciones. La vigilancia ejercida por organizaciones de migrantes ha intensificado los litigios y evidenciado un cambio en las prioridades de esta comunidad, centrado ahora en asegurar una representación auténtica y significativa. Las decisiones del TEPJF demuestran una adaptabilidad que prioriza los derechos migrantes, aunque aún deben ajustarse los criterios para garantizar que quienes representan a la diáspora tengan un vínculo real con sus comunidades de origen.

Para mejorar esta representación, se recomienda considerar escaños reservados en el Congreso para ciudadanos mexicanos en el extranjero, emulando modelos internacionales y asegurando así una representación genuina. Además, es fundamental otorgar posiciones preferentes a las candidaturas migrantes en las listas de representación proporcional de los partidos políticos, evitando que ocupen lugares simbólicos sin real posibilidad de elección. También se sugiere establecer criterios más estrictos para los representantes migrantes, exigiendo pruebas de residencia estable en el extranjero y una participación activa en organizaciones comunitarias, lo cual fortalecería el vínculo entre los candidatos y la comunidad migrante.

Asimismo, es vital continuar con los esfuerzos de credencialización y facilitar el acceso a medios de votación simplificados, incluyendo la expansión de sedes consulares para el voto presencial y la reducción de los trámites de registro. Se propone también que la observación electoral sea un proceso continuo que abarque todo el ciclo electoral, con un enfoque en la evaluación y cumplimiento de acciones afirmativas para asegurar una representación real. Finalmente, se recomienda ampliar el debate más allá del voto activo, promoviendo una representación política efectiva y auténtica de los mexicanos en el extranjero en los espacios de toma de decisiones.

Para consolidar una democracia inclusiva, es imperativo que el gobierno mexicano y sus instituciones electorales garanticen no solo el acceso al voto, sino también una representación política auténtica para la diáspora mexicana. Solo mediante un enfoque integral y un compromiso sostenido con la justicia electoral y las reformas legislativas, México podrá construir una democracia que refleje la diversidad y las voces de todos sus ciudadanos, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Referencias

Acuerdo Nacional por la Integridad ANIE. (2024). *Primer informe sobre integridad en el proceso electoral 2023–2024*.

Instituto Nacional Electoral (INE). (2023). *Acuerdo del consejo general del instituto nacional electoral por el que se emiten los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que soliciten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones, ante los consejos del instituto en el proceso electoral federal 2023-2024* (Acuerdo INE/CG527/2023).

Instituto Nacional Electoral (INE). (2023). *Acuerdo del consejo general del instituto nacional electoral por el que se aprueba el “modelo de operación del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en modalidad presencial en módulos receptores de votación en el extranjero, para los procesos electorales federal y locales 2023-2024”* (Acuerdo INE/CG590/2023).

Otálora Malassis, J. (2022). *Democracia inclusiva en México 2021: caso de la paridad de género y acciones afirmativas para grupos históricamente invisibilizados*. Revista Especializada Justicia Electoral y Democracia. Recuperado de <https://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/2023/05/Mexico.pdf>

Tacher Contreras, D. (2023). *Mecanismos de representación para la ciudadanía mexicana residente en el extranjero en Acciones afirmativas rumbo a las elecciones de 2024 en Jalisco*. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

IDEA. (2011). *Justicia electoral: Una introducción al manual de IDEA Internacional*.

Sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (2023). *Sentencia que, con motivo de la demanda presentada por Ricardo Landa Patiño, declara inexistente la omisión legislativa atribuida al Congreso de la Unión, relacionada con la regulación del juicio digital en los tribunales electorales locales* (SUP-JDC-324/2023). Magistrado Ponente: Felipe De La Mata Pizaña.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (2023). *Sentencia que modifica el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relacionado con la implementación de acciones afirmativas*

para las personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero (SUP-JDC-346/2021 y acumulados). Magistrado Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (2023). *Sentencia que, con motivo de las demandas presentadas por Fuerza Migrante A.C. y otros, acumula los medios de impugnación y confirma, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave INE/CG625/2023* (SUP-JDC-617/2023 y acumulados). Magistrado Ponente: Felipe De La Mata Pizaña.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (2023). *Sentencia que analiza el modelo de votación presencial en sedes consulares y evalúa el acuerdo aprobado por el INE sobre el voto en el extranjero* (SUP-JDC-639/2023 y acumulados). Magistrado Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (2024). *Sentencia que analiza la idoneidad de registro de candidaturas migrantes y establece un criterio de flexibilidad para su cumplimiento* (SUP-JDC-394/2024 y acumulados). Magistrado Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.